

La prohibición de la tortura, derecho humanitario The prohibition of torture, humanitarian law

Guadalupe del Carmen Morales-Toledo¹

Fecha de recepción: 28 de mayo de 2019
Fecha de aceptación: 28 de marzo de 2020

Resumen - La tortura es un delito que está vinculado a graves violaciones de derechos humanos. Prevenir, investigar, procesar, sancionar y erradicar dichas conductas representa uno de los retos más importantes en materia de justicia y derechos humanos en nuestro país, que actualmente ha alcanzado altos niveles de impunidad y requiere la adopción de nuevas y mejoradas técnicas, metodologías y estrategias de investigación que permitan atender la demanda de acceso a la justicia que solicitan las víctimas de estos delitos. Las personas privadas de su libertad (PPL) piden que se investiguen los actos de tortura en sí, indagación que realiza un equipo multidisciplinario en el que participan abogados, médicos y psicólogos, basándose en los lineamientos establecidos en el *Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes*, mejor conocido como Protocolo de Estambul.

▼
Palabras clave: Delitos sexuales, derechos, violación.

Abstract - Torture is a crime linked to serious human rights violations. To prevent, investigate, sanction and eradicate it, represents one of the biggest challenges when it comes to justice and human rights within our country, which currently holds high levels of impunity, and requires new and better investigation techniques, methods and strategies, that will allow meeting the demands for access to justice requested by the victims of these crimes. People deprived of their liberty (PDL) are demanding that all acts of torture itself become the subject of an investigation conducted by a multidisciplinary team in which lawyers, doctors and psychologists participate, based on the guidelines constituted in the *Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, commonly known as the Istanbul Protocol.

▼
Keywords: Torture, cruel, inhuman and degrading treatment, human rights, Istanbul Protocol.

¹ Poder Judicial del Estado de Oaxaca/Consejo de la Judicatura. Correo electrónico: gpe.moralestoledo@gmail.com

Aspectos generales

En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se menciona que:

los Estados Parte [...] considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo; reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana; considerando la obligación de promover el respeto universal y la observación de los derechos humanos y las libertades fundamentales; teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 1987, p. 1).

En el artículo 1 de la referida Convención se determina que se entenderá por “tortura”:

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos actos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 1987, p. 1).

La diferencia entre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes es que el primer acto es efectuado por cualquier persona, sea cual sea su posición en el sistema social que nos rige, siendo un particular o un servidor público; y los términos subsecuentes corresponden a los actos realizados por los servidores públicos. El entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que, del año 2000 a mayo de 2017, el organismo procesó 417 quejas por tortura y otras 11 196 por tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estas quejas, se emitieron cien recomendaciones por tortura y 191 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con la existencia de las comisiones de derechos humanos, instancias no jurisdiccionales e independientes de Ministerio Público, una gran parte de las denuncias por violaciones de derechos humanos y, en particular por tortura, se canaliza a través de ellas. Por sus características, las víctimas de presuntas violaciones o sus representantes se muestran mucho más accesibles a acudir a estas instituciones que directamente ante el Ministerio Público. Siendo así, las comisiones de los derechos humanos se han convertido en órganos imprescindibles, puesto que la recomendación que emiten como resultado de sus investigaciones sobre los casos denunciados resulta medular.

La tortura y el Estado mexicano

A pesar de que el Estado mexicano ha recibido múltiples recomendaciones por parte de organismos internacionales en materia de tortura, y ha ratificado y firmado los principales acuerdos destinados a prevenirla y luchar contra ella, continúa siendo un instrumento constantemente utilizado por las fuerzas de seguridad, pese a que no es admisible la obtención de pruebas o confesiones mediante tortura o coacción. Es difícil contar con cifras cercanas a lo que ocurre con la práctica de la tortura en el país; sin embargo, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, se ha incrementado en 600% en los últimos 10 años (Cruz, Cruz & Melchor, 2014, p. 9).

Resulta alarmante este porcentaje en aumento, no obstante, la investigación tiene que realizarse bajo estrictos lineamientos por peritos capacitados en la materia, ya que los dictámenes resultan de vital importancia para la autoridad jurisdiccional a la hora de resolver al respecto y tomar las decisiones correspondientes.

Existen casos en que las detenciones se llevan a cabo sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza. Durante la detención y en los traslados inicia la tortura (insultos, humillaciones, amenazas, golpes, posiciones forzadas, entre otros), posteriormente un gran número de detenidos es llevado a lugares clandestinos en donde continúa el martirio, hasta que la víctima se declara culpable de lo que sea con tal de que ya no la lastimen. Estas personas son presentadas ante los medios como culpables, sin que se haya realizado ninguna investigación de los hechos y se haya determinado su responsabilidad. Es en este marco que toma importancia la aplicación del Protocolo de Estambul como una herramienta de documentación de la tortura y para investigar los sucesos (Cruz, Cruz & Melchor, 2014, p. 10).

El Subcomité para la Prevención de la Tortura del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU recomienda al Estado mexicano que aumente las medidas de supervisión dentro de la jerarquía de la policía, de manera que los oficiales superiores lleven a cabo sus labores de inspección y constaten de manera detallada cómo realizan las detenciones los agentes, supervisando también el comportamiento de los oficiales de la policía y reforzando de manera sistemática y urgente los lineamientos para llevar a cabo su labor conforme a derecho, ya que los abusos de poder deben ser tratados rigurosamente.

El Protocolo de Estambul tiene aplicación tanto para abogados como para médicos y psicólogos, pues indica claramente cuáles son los puntos que deben indagarse en la historia de tortura, así como en las secuelas derivadas de ella, desde el momento del suceso, en la actualidad y la proyección al futuro, para

poder adquirir una visión amplia como auxiliares de los jueces en el esclarecimiento de los hechos.

México atraviesa una compleja situación de seguridad pública, la delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población. Desde 2006, bajo la denominada guerra contra el narcotráfico se han implementado medidas para regular la detención, investigación y combate de ese tipo de delincuencia, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas para que cumplan con funciones de seguridad pública. La CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2 020 quejas en 2011 y 2 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1 148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las fuerzas armadas. El gobierno y la CNDH informaron de una reciente disminución de quejas por violaciones a los derechos humanos, además de que se han adoptado medidas que favorecen la prevención del delito e implementado políticas de seguridad con perspectiva de derechos humanos, incluyendo el repliegue de fuerzas militares en algunas zonas, la restricción del arraigo, las reformas constitucionales, nuevas disposiciones legales y jurisprudenciales, y capacitaciones en derechos humanos (Méndez, 2015, pp. 25-26).

En nuestro país, la práctica y el tratamiento normativo e institucional de la tortura se han vuelto más complejos y su comprensión “clásica” se ha desfasado, entendiendo esto como el modo en que se han abordado con anterioridad los distintos casos, cuando actualmente los torturadores han “profesionalizado” sus técnicas, tanto porque ocurren bajo maneras cada vez más sutiles y sofisticadas, emergiendo nuevas e inesperadas formas de provocar daño en la integridad del ser humano que no registran los códigos penales, como porque el modelo constitucional de protección a los derechos humanos ha rebasado por mucho a las legislaciones federales y locales vigentes en cuanto a una mayor exigencia para salvaguardar los derechos

humanos; además, porque las víctimas de tortura permanecen en un limbo jurídico en que las nuevas normas garantes y las de antaño no terminan de articularse entre sí para protegerlas efectivamente. Por lo anterior, para avanzar en el tema y lograr una reforma profunda en nuestros sistemas de justicia y seguridad, es vital que repensemos la tortura, es decir, identificar a partir de la investigación cómo se ejerce, bajo ciertas condiciones quiénes denuncian estos hechos, para entender el trasfondo y las motivaciones que conducen a este tipo de conductas. Lo anterior permitirá que desarrollemos nuevas fórmulas para su prevención, investigación, sanción y reparación, lo que implica contar con un enfoque normado por una nueva gramática de la justicia, en donde las leyes federales y locales no se contrapongan y sean coincidentes en su aplicación, dependiendo de la falta a la norma cometida, tanto a la jurídica como a la establecida por los órganos encargados de velar por que no se atente contra los derechos humanos (López, Cantú & Cárdenas, 2013, p. 12).

Se espera que esta indagación se realice lo más pronto posible, así como la emisión de los resultados obtenidos de las valoraciones correspondientes; sin embargo, como peritos nos enfrentamos a múltiples situaciones, por ejemplo, el número de solicitudes de investigación que supera a las personas capacitadas para llevar a cabo esta labor, tomando en cuenta que se tienen que cubrir en su totalidad las regiones y municipios en donde haya gente privada de la libertad que afirme que fue torturada al momento de su detención. Por otra parte, tampoco puede hacerse en una sola visita, ya que las entrevistas de historia de tortura pueden durar horas, lo que significa un agotamiento mental para quien narra los eventos, de ahí que se deban programar distintas visitas para practicar estudios médico-psicológicos, que aunque quieran hacerse con inmediatez, la demanda de investigación de casos no siempre lo permite. Ahora bien, considerando que se trabaja a marchas forzadas para alcanzar el objetivo, también nos encontramos con

que, en ocasiones, las personas privadas de su libertad solicitan que esté presente alguien de su confianza durante la realización de la misma, o que no entienden el idioma con el cual nos comunicamos y que requieren traductores, o bien en ese momento no se encuentran en condiciones de salud adecuadas para mantenerse enfocadas en lo que se pretende efectuar, por lo que previo a toda investigación se tiene que firmar un consentimiento informado que permita la utilización de los datos obtenidos, al ser una solicitud de carácter judicial. Si no se cubren todos los elementos, no puede llevarse a cabo, hasta que se atiendan los requerimientos a los que por derecho tienen, lo que provoca una dilación en el procedimiento.

La tortura y los malos tratos son generalizados en México. Se recibieron numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y se conocieron varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de la policía municipal, estatal y federal, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del ministerio público de ampliar el plazo de detención (Méndez, 2015, p. 26).

México ha prestado la atención necesaria a las múltiples recomendaciones, formuladas desde hace décadas, apoyándose de diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos sobre la urgencia de prevenir, erradicar y sancionar la tortura. A pesar de la condena enérgica,

esta práctica sigue siendo una realidad lacerante en el país. Eliminarla implica combatir desde la raíz los factores que la perpetúan: la aceptación por parte de jueces de confesiones obtenidas bajo esta condición, a pesar de que la Constitución mexicana lo prohíbe, así como la falta de un mecanismo especializado que investigue y sancione los casos de tortura y termine con la impunidad que le rodea, tomando en cuenta que desde 1994 a la fecha sólo han sido condenados por este motivo dos funcionarios federales, mientras que las comisiones de derechos humanos nacional y algunas estatales han documentado cientos de denuncias de tortura y miles más de maltrato en el periodo de 2007 a la fecha (López, Cantú & Cárdenas, 2013, p. 3).

Existen algunas entidades federativas en donde mediante videos en las redes sociales se han evidenciado vejaciones y malos tratos a los detenidos y cuando se ha señalado el actuar de las autoridades se han justificado diciendo que es una capacitación al personal, lo cual resulta difícil de creer; no obstante, eso no niega la existencia de esta práctica y la falta de conocimiento, así como la nula consciencia de que si bien es cierto que han cometido un delito, existen los medios jurídicos para la aplicación de la ley que nos rige en cada caso y que estos son actos innecesarios para obtener información que los incrimine o no. Para tal efecto, se cuenta con los expertos en investigación que se encargarán de recabar datos respecto de lo que se les ha señalado, pero lo anterior es un ejercicio de consciencia que tiene que ver con las estrategias de prevención de la tortura.

Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar la tortura o los malos tratos como delitos de menor gravedad. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta de la persona detenida ante la autoridad judicial, con motivo de castigar, extraer confesiones o información incriminatoria. Generalmente las víctimas denuncian haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no

identificados y no cuentan con una orden judicial, ni informan los motivos de la detención. Cuando ésta se lleva a cabo en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Los detenidos son llevados con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan golpes con puños, asfixia, toques con dispositivos eléctricos generalmente en los genitales y pies, asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas e insultos. En ocasiones transcurren días sin que se informe el paradero de la persona detenida o sin que se le presente ante la autoridad ministerial o judicial (Méndez, 2015, p. 27).

En el desarrollo de la actividad jurisdiccional constitucional se han fijado algunas directrices mínimas respecto de los deberes que tienen que cumplir las autoridades en el ámbito de su competencia:

1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que la misma sea investigada, y en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, de ser cierta, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las averiguaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión.
2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.
3. Atendiendo al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones (Estrada, 2016, p. 12).

Derechos humanos y su interpretación

La investigación de la tortura como delito requiere la definición de un marco conceptual adecuado que facilite el cambio de perspectiva que necesitan los encargados de realizarla, sobre todo porque se enfrentan a un laborioso proceso de búsqueda y recolección de evidencias, a través de técnicas de investigación conformes con los derechos humanos; además de una planeación cuidadosa de sus actividades de indagación, garantizar su independencia técnica e imparcialidad al momento de llevarla a cabo, fortalecer el trabajo en equipo y estar preparado para manejar investigaciones complejas teniendo en consideración que los perpetradores utilizan el poder que ejercen sobre las víctimas no sólo para cometer el delito, sino para obstaculizar el trabajo investigativo, que demanda un conocimiento de perfiles de víctimas y victimarios, así como de los modos de operación (*modus operandi*), indispensable para entender la complejidad del fenómeno y no sólo castigarlo, sino prevenirlo (Estrada, 2016, p. 7).

Es importante conocer lo relativo a los derechos humanos, así como su interpretación, ya que existen líneas muy delgadas que marcan la pauta de accionar en distintos escenarios, por lo que como funcionarios públicos y en general todos debemos ser cuidadosos en nuestro actuar, aunque en ocasiones existen inconformidades por creer injusta la interpretación de los derechos humanos respecto de una contraparte que se considera afectada. Sin embargo, tenemos que entender la diferencia entre el acto cometido y nuestra condición humana, ya que si bien es cierto que en nuestra calidad de individuos gozamos de un conjunto de derechos que pueden ser ejercidos en cualquier momento y que existen instancias que velan por que se cumplan para todos y cada uno de los miembros en sociedad, también es cierto que no se puede minimizar el daño cometido a partir del delito; pero en el caso de las personas privadas de su libertad y que en su detención sufren actos de tortura, debe entenderse que tienen derechos como individuos

y distinta debe ser la investigación por tortura, más allá de la averiguación del delito, que no tendría que contrarrestar el daño ocasionado ni dar posibilidad de no responsabilizarse de los actos cometidos.

Tortura como violación a derechos humanos y como delito

Al igual que en otras faltas vinculadas con graves violaciones a derechos humanos, la tortura tiene que ser entendida en dos dimensiones, cuya base constitucional se introdujo por primera vez con la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública vigente a partir del 18 de junio de 2008, que establece como principio del proceso penal acusatorio que "toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula" (Estrada, 2016, p. 7). A partir de esta premisa se impone la obligación del órgano jurisdiccional de, previa investigación, determinar la existencia de transgresión a derechos fundamentales en el proceso de obtención de una prueba, que se pronuncie sobre su nulidad y en consecuencia sea desechada.

Las violaciones a derechos humanos hoy tienen perfiles complejos que pueden implicar la existencia de redes donde interactúan actores gubernamentales, empresarios, miembros del crimen organizado o líderes locales que operan por medio de la violencia; así como rutinas, procesos, instituciones formales o informales que se han adherido a la operación formal del gobierno; marcos de cultura política que generan lógicas de opresión sobre grupos en situación de vulnerabilidad y entornos de corrupción e impunidad generalizados. La complejidad en que ocurren las violaciones a los derechos humanos hace necesario contar con herramientas que permitan realizar una documentación e investigación profundas para identificar las condiciones y los patrones que subyacen a ellas. Además, se requieren instrumentos que contribuyan a incidir en las estructuras que hacen posibles dichas violaciones y generar propuestas de garantía de los derechos humanos que modifiquen

dichos patrones (Ansolabehere, Robles, Saavedra, Serrano & Vázquez, 2017, p. 8).

La obligación de las autoridades, en todos los niveles de gobierno y en sus ámbitos de competencia, es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación. Así, frente a la denuncia de un hecho que pueda constituir tortura para cualquier autoridad surge, entre otros, el deber de investigar tanto el delito como la violación a derechos humanos, y si esa denuncia ocurre dentro de un proceso penal, corresponderá al órgano jurisdiccional presentar la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar la investigación criminal, pero también le surge la obligación de averiguar la alegada violación a derechos humanos (Estrada, 2016, p. 8).

Investigación de la tortura

El *Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, conocido como Protocolo de Estambul (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004), hace referencia al objetivo general de la indagación, el cual consiste en aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura, a fin de identificar a los responsables de tales actos y facilitar su procesamiento o de utilizar la información en el contexto de otros procedimientos enfocados a lograr reparación para las víctimas. Es importante que las personas encargadas de la investigación traten de obtener declaraciones de la presunta tortura, recuperar y preservar las pruebas -incluidas las médicas-, identificar testigos y determinar cómo, cuándo y dónde se han producido los hechos denunciados, así como cualquier tipo de pauta o práctica que pueda haber dado lugar a la tortura.

Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de esta práctica y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se cuentan los siguientes:

- a. Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias;
- b. Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos;
- c. Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, así como demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, además de brindar los medios para que la persona afectada reciba atención médica y rehabilitación.

En ocasiones, por la existencia de relaciones entre casos, se hace necesario pasar de investigar uno solo a mirar un conjunto de ellos. En este escenario, trabajarlos aisladamente implicaría: 1) no atender de forma efectiva los factores que dieron origen a una violación; 2) permitir que las violaciones a derechos humanos como las aquí analizadas no se detengan y continúen repitiéndose; 3) reducir injustificadamente la potencialidad de una investigación para enfrentar una violación de derechos humanos; y 4) contribuir a que las demás personas en una situación similar deban pasar por largos y complicados procesos para que su demanda sea resuelta a pesar de que, en los hechos, hayan tenido experiencia semejante a aquella que previamente ya fue calificada formalmente como una violación.

Las autoridades están obligadas a realizar un análisis contextual cuando haya diversos elementos que no permitan inferir que se trata de "fenómenos aislados", "inconexos" o "no representativos" de una situación general. De cualquier forma, cabe precisar que mientras el referido análisis contextual puede

ser ineludible para los operadores de mecanismos de procuración y administración de justicia, así como de mecanismos no jurisdiccionales, otras autoridades y miembros de la sociedad civil están habilitados para solicitar a las autoridades correspondientes que cumplan con su deber de efectuarlo (Ansolahehere *et al.*, 2017, p. 8).

Al respecto, es posible que el análisis contextual sirva como una herramienta para conocer y entender la comisión del acto que infringe la ley, no para justificar el hecho, sino para prevenir probables actos a futuro por personas que se encuentren inmersas en situaciones parecidas, considerándolo. Esto pudiera auxiliar a prevenir el delito, atendiendo a las necesidades que surgen en determinadas poblaciones, en distintos grupos sociales, con diversas formas de pensamiento.

La Corte Interamericana retoma una multiplicidad de fuentes para construir y analizar el contexto, tanto de origen nacional como internacional, siempre y cuando las estime relevantes para reconstruir el entorno en el que sucedieron los hechos que examina. Entre ellos se encuentran informes de relatores, artículos académicos o periodísticos, peritajes, normas jurídicas e incluso sus propios fallos. Lo que importa es que le aporten suficiente información sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo una violación a derechos, aquellas que lo permitieron o incluso sus consecuencias (Ansolahehere *et al.*, 2017, p. 15).

Ley General

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decretó una nueva ley publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 26 de junio de 2017 (Cámara de Diputados, 2017), llamada Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, documento en el que, en esencia, se habla de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier

acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, estableciendo medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para avalar los derechos de las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En tales casos, la examinación o evaluación conforme al Protocolo de Estambul, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes de la Comisión Nacional y de los organismos de protección de derechos humanos, la llevarán a cabo los peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y psicológica, a fin de documentar los signos físicos o psicológicos que presente la víctima y el grado en que dichos hallazgos médicos y psicológicos se correlacionen con la comisión de actos de tortura (Cámara de Diputados, 2017).

Con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en todo el país, a partir del 18 de junio de 2016, se proveyó a las áreas de investigación de un marco normativo basado en los más altos estándares de derechos humanos para quienes intervienen en el proceso penal, que además tiene por disposición del artículo 73, fracción XXI de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* leyes generales que establecen los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, que aseguren la correcta aplicación de las mismas (Estrada, 2016, p. 6).

Protocolo de actuación

A pesar de los avances que México ha registrado para mejorar la situación de los derechos humanos, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades. En este contexto, el Poder Judicial tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, por lo que consecuentemente le corresponde adoptar una postura asertiva para combatir la tortura. Con tal propósito surge el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en esos casos, junto con la *Guía para*

operadores jurídicos, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Internacional de Abogados, que ofrece importantes insumos para que las autoridades judiciales puedan cumplir con dichas obligaciones. Las juzgadoras y los juzgadores, y quienes puedan utilizar este protocolo, apreciarán que no se limita a los casos de tortura, sino que comprende otros delitos o malos tratos relacionados (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, pp. 17-18).

En efecto, la tortura suele percibirse como una costumbre de otras épocas, ya que en la antigüedad los encargados de contener el orden social o impartir justicia creaban instrumentales para castigar físicamente a quienes cometían un delito o falta a la sociedad como únicas maneras de condena, siendo éstas aceptadas por la sociedad; pero en la actualidad se continúa con prácticas que dañan la integridad humana. Si bien se argumenta que es una conducta desprovista de razón o barbárica, al mismo tiempo se ejecuta desde la máxima expresión histórica de la organización humana: el Estado. Por tal motivo es que resulta tan impactante y contradictoria, lo que explica que se busque minimizarla, ocultarla o justificarla incluso como un medio para hacer justicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 18).

Protocolo de Estambul

Debido a la necesidad de que los Estados identifiquen y apliquen medidas eficaces para proteger a las personas contra la tortura y los malos tratos, el manual denominado Protocolo de Estambul se ha preparado para contribuir a que las entidades federativas utilicen uno de los medios fundamentales para proteger a los individuos contra la tortura: una documentación, la cual saca a la luz las pruebas de torturas y malos tratos de manera que se pueda exigir a los torturadores que den cuenta de su conducta y permitir que se haga justicia. El Protocolo ofrece un punto de referencia, tanto para los/as profesionales de la salud como para los/as encargados/as de impartir justicia.

Como ya se mencionó, el Protocolo de Estambul es un manual para investigar y documentar eficazmente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Reúne las directrices internacionales, los principios relativos a la investigación y documentación efectivos de la tortura, los cuales esbozan unas normas mínimas para que los Estados puedan contar con una documentación eficiente de la tortura. El manual y los principios son el resultado de tres años de análisis, investigación y redacción a cargo de más de 75 expertos/as en Derecho, salud y derechos humanos que representaban a 40 organizaciones o instituciones de 15 países. La conceptualización y preparación del documento es producto de la colaboración entre expertos/as forenses, médicos/as, psicólogos/as, observadores/as de los derechos humanos y juristas. A partir del año 2000, en México se inició un proceso liderado por la entonces Procuraduría General de la República, para implementar el Protocolo de Estambul. En el año 2003 el procurador en turno emitió un acuerdo mediante el cual se establecieron las reglas institucionales para aplicar el dictamen médico-psicológico (Cruz, Cruz & Melchor, 2014, p. 10).

El Protocolo de Estambul es una herramienta fundamental para guiar las investigaciones de tortura y malos tratos. Su puesta en marcha en México se basa, principalmente, en un procedimiento establecido en el acuerdo A/057/2003 de la PGR, que regula la actuación de los servicios periciales adscritos a esa entidad (Méndez, 2015, p. 30). Sin embargo, pese a la amplia normativa que proscribe su instrumentación, la tortura continúa empleándose o justificándose. Fue justamente dentro del espíritu por erradicarla que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos decidió celebrar una serie de seminarios y talleres que permitieran socializar experiencias, difundir problemáticas y plantear alternativas de solución para enfrentar el desafío que implica respetar plenamente la integridad de la persona y suprimir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Si bien el propósito central es que la tortura no ocurra y se implementen las medidas necesarias para prevenirla, su existencia misma exige la adopción de providencias tendientes a garantizar que cuando no haya podido evitarse, se disponga de los mecanismos adecuados para investigarla y sancionarla; objetivos ambos que ameritan una documentación profesional de los hechos delictivos. Es irrefutable que de la correcta documentación del abuso depende, en gran medida, la posibilidad de identificar y romper los incentivos de diversa índole aún existentes para torturar y violentar la integridad de la persona. La documentación científica y técnica sirve, además, para acreditar la comisión de la actuación ilícita dentro de los procedimientos legales y contribuye a romper el manto de impunidad que rodea a tan hiriente conducta, donde la integridad de mujeres y hombres resulta gravemente lesionada (Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p. 6).

Actualmente se continúa con la capacitación a peritos oficiales del área médica, psicológica y trabajo social para la investigación bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul y se están atendiendo las demandas de indagación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sirviendo como auxiliares de la autoridad jurisdiccional. Empero, hay una gran tarea por hacer en la cuestión preventiva, para atender e investigar los actos que vulneran la condición humana. Por tanto, es importante enfocarse en brindar información y capacitación a quienes entran en contacto directo con quienes han cometido un delito para darles un trato digno, cualquiera que sea la condición que amerite su aprehensión, para permitir que la ley se establezca de la forma correspondiente, seguir evolucionando en su aplicación y no provocar retrocesos en la impartición de justicia, favoreciendo a que la misma trascienda en nuestro país.

Conclusiones

Es indispensable atender a los instrumentos internacionales en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como son:

- La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- El Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las indagaciones por estos actos debieran ameritar la apertura de expedientes distintos respecto de la denuncia, sin relacionarlos con el delito cometido, que representa una supuesta responsabilidad de haber infringido una norma social. Asimismo, la investigación debe realizarla un equipo multidisciplinario formado por profesionales en las áreas médica, psicológica, trabajo social y, por supuesto, por los/as abogados/as que solicitan la averiguación de los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados.

Una vez hecha la investigación y documentación por las áreas correspondientes, apegadas a los lineamientos del Protocolo de Estambul, los resultados deben ser emitidos en un dictamen con las especificaciones necesarias, con el propósito que de resultar casos positivos a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se dé el seguimiento pertinente por parte de las instancias que buscan salvaguardar los derechos humanos, para los fines legales a que haya lugar.

Referencias

Ansholabehere, K., Robles, J. R., Saavedra, Y., Serrano, S., & Vásquez, D. (2017). *Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para casos de violaciones a los Derechos Humanos*. México: FLACSO.

Cámara de Diputados. (2017). *Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. México: *Diario Oficial* de la Federación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf

Cruz, R. A., Cruz, R. P., & Melchor, D. L. (2014). *La investigación de la tortura en México. Informe Conjunto*. México: Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C.

Estrada G., I. (2016). *Manual para la protección de las víctimas y el plan de investigación de la tortura*. México: Insyde Ideas-Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C.

López, P. E., Cantú, S., & Cárdenas, E. (2013). Enfoques para combatir la tortura desde una nueva gramática de la justicia. *Defensor, Revista de Derechos Humanos*, XI(7), 12-19.

Méndez, J. E. (2015). *La tortura en México, una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas*. México: CNDH.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (1987). *Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2004). *Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/trainin-g8Rev1sp.pdf>

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2007). *Consideraciones para la investigación y documentación de la tortura en México*. Recuperado de <https://issuu.com/hchr/docs/consideracionestortura>

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). *Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucre hechos constitutivos de tortura y malos tratos*. México: Dirección General de Comunicación y Vinculación Social.



"El equilibrio"

Obra escultórica de Jorge López

Villa de Etla, marzo de 2019

Fotografía de Judith Romero